

Crónica de la semana

EL DILEMA DEL SEÑOR PUJOL

Salou (Tarragona.) Si la sutileza y la habilidad política fueran magnitudes mensurables y pudiera organizarse un campeonato, estoy seguro de que la final la disputarían Jordi Pujol y Pío Cabanillas. Hace ya unos cuantos meses —poco antes de las elecciones generales— el destino quiso que ambos coincidieran en el marco de un almuerzo de concurrencia reducida, organizada por este periódico.

Tras una sucesión de celebrados lances en los que quedó de relieve el perfecto dominio que uno y otro poseen del arte de la esquivia, el gallego sabio empujó al catalán hacia las cuerdas. «¿Cómo vendréis a las nuevas Cortes los políticos catalanes? —le preguntó—. «¿Vendréis como comunistas, centristas, socialistas conservadores, actuando de acuerdo con la variedad del espectro político, o vendréis fundamentalmente como catalanes, formando un bloque monolítico y anteponiendo vuestras reivindicaciones a cualquier otra consideración?» Después de amortiguar la contundencia de la pregunta con sus habituales dosis de moderación y algunos afortunados rodeos de carácter semántico, Pujol terminó reconociendo, que, en su opinión, la catalanidad primaria sobre la ideología.

Aun teniendo parte de afinado pronóstico, tal respuesta era, sobre todo, la expresión del más arraigado de sus deseos y, por supuesto, el anuncio de sus propias intenciones. Pujol siempre ha soñado con ser el interlocutor de Cataluña ante el Poder central, el portaestandarte de los anhelos de «su país» ante el Gobierno de Madrid. Recuerdese cómo esta actitud, expresada a través de su presencia en la Comisión negociadora de la oposición, provocó —comprensiblemente— el recelo y la ira de Tarradellas antes de su regreso. Sólo un político de su talla habría sido capaz de mantener vivas esas expectativas, tal y como Pujol ha hecho, después de obtener unos resultados electorales bastante más modestos de lo esperado. No es, por ejemplo, ninguna coincidencia que el grupo parlamentario resultante del Pacte Democràtic —coalición formada por los partidos de Pujol, Trias Fargas y Verde Aldea— tomará para sí el nombre de Minoría Catalana y que toda su estrategia quedara desde entonces condicionada e inspirada por tal denominación.

Pujol y sus colaboradores han demostrado en el pasado reciente un fino sentido de la oportunidad, al aprovechar cada tropiezo gubernamental de forma que todo balón de oxígeno servido en el hemiciclo del Congreso se fuera traduciendo en concesiones sustanciales en favor de esa «clerica idea de Cataluña» que con admirable seguridad ellos alientan. El más espectacular de dichos trueques —incorporados lue-

go al zurrón del consenso—, tiene lugar en el Palacio de la Moncloa el jueves 16 de marzo: a cambio de la seguridad de que su Gobierno no será derribado en el Pleno del 5 de abril, el presidente Suárez, con el directo asesoramiento de su «alter ego», el ex ministro de Agricultura, acepta los planteamientos de Pujol y Miquel Roca sobre el título octavo de la Constitución, así como la inclusión del término «nacionalidades» en el artículo segundo. Cuando personajes tan poco sospechosos de prestar su apoyo a causas reaccionarias como Julián Marías y Manuel Díez Alegría han sumado sus enmiendas a la ya comentada el pasado domingo de Camilo José Cela, es conveniente que la opinión pública tenga en cuenta que tan controvertido vocablo no habría llegado jamás a figurar en el dictamen constitucional del Congreso de no mediar la mencionada crisis doméstica y su consecuente desenlace.

□ «ANTES PACTAR CON EL DIABLO»

Las circunstancias de la política española han colocado a Pujol en vísperas de recibir un posible ofrecimiento para que él o —más probablemente— alguno de los vallosos dirigentes de su partido se incorporen al Gobierno de U. C. D. Si esto sucede y, tal y como ha venido insinuándose desde hace meses, el reto es aceptado, la pregunta de Pío Cabanillas volverá a quedar sobre la mesa con redoblada vigencia. ¿Cómo vendrán los hombres de Convergencia Democrática al Consejo de Ministros? ¿Vendrán como miembros de un partido de trayectoria e ideología centrista, cuyo ámbito de actuación resulta ser Cataluña, o vendrán lisa y llanamente como catalanes, requiriendo a cambio de su colaboración un trato de favor en el trámite parlamentario del Estatut o una mayor celeridad en el traspaso de competencias a la Generalidad?

Los últimos indicios no son nada reconfortantes a este respecto. Después de la disolución de la Esquerra Democràtica de Trias Fargas en el seno de Convergencia, Pujol desea reconvertir su colectivo en un hipotético Partit Nacionalista de Catalunya, en el que, de acuerdo con la arquitectura por él perfilada, se integraría también la Unió Democràtica de Canellas y la Esquerra Republicana de Barrera. Quedaría en cambio excluida la rama catalana del partido del Gobierno, ya que según Josep Maria Cullerl —uno de los más brillantes «jóvenes aïrados» de Convergencia—, «antes pactar con el diablo que con la U. C. D.».

Tal orden de prioridades no puede extrañar a nadie que sepa que el señor Sentís y compañía son «sucursalistas», máximo baldón que en estos momentos puede pesar sobre un político en Cataluña. Al menos para Pujol la dependencia orgánica con respecto a una fuerza superior de ámbito estatal es una circunstancia prácticamente descalificadora y así lo ha puesto de manifiesto en un reciente artículo, que ha molestado de forma especial a los socialistas, protagonistas hace muy pocas semanas de la culminación de su proceso unitario a la sombra del P. S. O. E. En este mismo artículo, Pujol explicaba, utilizando para ello el paralelismo histórico, las razones por las que a su partido le parece bien pactar con la U. C. D. de Madrid, mientras que antes prefiere tener a Lucifer como compañero de viaje en Barcelona. Recordaba así, cómo la Lliga co-



laboró en el Gobierno con radicales y centristas —a quienes trataba de aplastar en Cataluña— y cómo la Esquerra Republicana compartió el poder con el P. S. O. E., partido al que en su feudo combatía implacablemente de la mano de la Unió Socialista de Cataluña.

Pujol parece olvidar —es algo que les ocurre con frecuencia a muchos de sus palsanos—, que la Historia que interrelaciona la política española y la política catalana durante al Segunda República es fundamentalmente la historia de un descomunal fracaso. Cuaiquier invocación al conocimiento empírico relativa a esta etapa no debería utilizarse, sino en defensa de una argumentación de carácter excluyente.

□ UN CORREDOR SIN RETORNO QUE LLEVA AL INDEPENDENTISMO

Afortunadamente, la España de 1978 se parece muy poco a la de 1931, y es el propio éxito de sus planteamientos —en lo fundamental impregnados hasta ahora de razón—, el que podría volverse contra Pujol y algunos de sus colaboradores. Constituir un partido nacionalista —de hecho eso ha venido siendo Convergencia—, tenía sentido en los albores de la transición, cuando Tarradellas aún pensaba que la muerte le llegaría en Saint-Martin-le-Beau y cuando luchar por el Estatut parecía luchar por una quimera. Hacerlo ahora, cuando Cataluña ha encontrado en medio de la general comprensión de las principales fuerzas políticas estatales una senda segura hacia una autonomía suficiente para colmar las aspiraciones de la inmensa mayoría de sus habitantes, adquiere tintes de dislate. Si el carácter unidimensional de los objetivos de la Minoría Catalana en el Parlamento ha podido quedar justificado por las especificidades constituyentes de los últimos meses —se trataba

LA FRASE DE LA SEMANA



ADOLFO SUAREZ:

«Vamos a asombrar positivamente más aún al mundo por la forma en que estamos consolidando la democracia.»

Crónica de la semana

El presidente Suárez no puede ni debe ofrecer a la «minoría catalana» un cheque en blanco, a cambio de su hipotética participación en el Gobierno»

de levantar un nuevo Estado de la nada y el mandato de los electores del Pacte no podía ser más expreso—, prolongar ahora tal actitud y hacerla extensiva a la probable remodelación del Gabinete diría muy poco a favor de esa españolidad básica que Pujol no ha cesado de proclamar.

El dilema de Jordi Pujol tal vez sea un dilema entre el entendimiento y el corazón, entre la inteligencia y la voluntad. La primera de sus dos opciones le llevaría a reconocer que entramos en una etapa de plena normalidad democrática, dando como buena la solución autonómica catalana y concentrándose en la definición del modelo de sociedad que postula su partido. La segunda alternativa no es sino un corredor sin retorno en el que la necesidad de alimentar el nacionalismo de sus bases, más allá de lo válidamente aceptado por los demás partidos, terminará lanzándole de bruces, antes o después, sobre el cemento fresco del independentismo.

En las actuales circunstancias, esta segunda vía puede parecer, sin embargo, la más cómoda y rentable. Si Pujol no atesorara entre sus muchas virtudes una curiosa mezcla de intuición y sentido de la trascendencia, la cuestión estaría de hecho zanjada en el sentido más negativo para todos. Renunciar a la exacerbación del nacionalismo como factor diferenciador significaría, a corto plazo, un cambio de estrategia bastante radical en el que inevitablemente se iría por la borda gran parte del activo atesorado durante los últimos meses. La conmoción en el seno de la convergencia sería enorme y la inevitable clarificación de las distancias entre el propio proyecto político y el de las fuerzas marxistas provocaría la salida de personas del estilo del senador gerundense Francisco Ferrer, que acaba de abandonar el partido, disconforme de los recientes ataques de Pujol contra los socialistas. «Mi conciencia cristiana me dice que tengo que ponerme a favor del débil», manifestó Ferrer a «Mundo Diario», explicando así de forma inefable su decisión.

A medio plazo esta nueva orientación de la Convengencia Democrática catapultaría, sin embargo, a Jordi Pujol hacia el liderazgo de una gran fuerza catalana de centro, capaz de superar a comunistas y socialistas en la próxima confrontación electoral. En un atinado comentario publicado el pasado miércoles en el «Noticiero Universal», Jordi Domenech recordaba la similitud entre el electorado que votó al Pacte Democràtic y el que optó por la U. C. D. La conclusión de tal planteamiento no puede ser más obvia: la polémica entre Sentís y Pujol resulta artificial y gratuita, y quien más pierde en el envite no es sino Cataluña entera.

La U. C. D. y el Gobierno no pueden seguir siendo desde Madrid mudos espectadores de la dinámica centrista catalana. Nada más absurdo que continuar coqueteando con Pujol, mientras éste fustiga incansablemente a la U. C. D. de Cataluña. Tal vez sea legítimo pensar que la operación Sentís-Jiménez de Parga fue un error en sí misma, y que desde el principio se debió haber buscado una homologación táctica con Pujol, Trias Fargas y Cañellas. Ya no es hora, sin embargo de rectificaciones. Si se trata de sumar a la Minoría Catalana a las tareas de Gobierno. El presidente Suárez no puede, ni debe, ofrecer a cambio un cheque en blanco.

LA DENUNCIA DE BANDRES Y EL CONSENSO SEGUN EL P. S. O. E.

La actividad en el Senado ha venido a romper ya esta semana la breve tregua catalana. La Cámara Alta ha servido de

escenario, de un lado, a un Pleno un tanto turbulento, y, posteriormente, al inicio de los trabajos de la Comisión Constitucional, reunida en esta primera fase en calidad de Ponencia. Al fondo de uno y otro episodio ha planeado, entre tanto, de forma obsesiva e incómoda, la sombra del sacrosanto consenso cocinado en el Congreso. Sobre la acusación de Bandrés, a propósito de las supuestas escuchas telefónicas en la sede del Consejo General Vasco, cabría repetir, palabra por palabra, la misma reflexión contenida hace algunos meses en esta crónica con motivo de las insinuaciones del P. S. O. E. sobre corrupción en torno al acuerdo pesquero con Marruecos. Si Bandrés puede probar sus tesis, habrá rendido un servicio al país, pero si no puede hacerlo, su irresponsabilidad.—o su malicia—, tampoco deben quedar impunes. El Parlamento es una tribuna muy seria como para jugar a la estrategia del «cuando el río suena...». Y desde luego que no es válido afirmar que se poseen pruebas, pero que no pueden revelarse por no comprometer a terceras personas. Los paisanos de Bandrés le llaman a eso «tirar la piedra y esconder la mano».

Está claro que en la intervención del senador «abertzale» hubo ingredientes como para irritar a cualquier persona de buena voluntad. Ni siquiera eso justifica, sin embargo, los «pitos y gritos de protesta», y el conato de agresión a cargo de los senadores centristas, certeramente recogidos en la crónica del redactor que cubrió la información para este periódico. La descripción de la escena recordaba las vejaciones sufridas por Manuel Escudero y Jesús Esperabé de Arteaga en aquellas sesiones de las Cortes Orgánicas. Recuerden los impetuosos senadores de U. C. D. que, tal y como, en su día, puntualizó su portavoz en el Congreso, José Pedro Pérez Llorca, nada descalifica tanto las argumentaciones de un Letamendía o un Bandrés como el hecho de que, incluso ellos, puedan expresarse libremente sin ningún tipo de coacción. En cualquier caso, el episodio no rebasa por el momento la dimensión de lo anecdótico. Mucho más sustancial fue la abstención de los socialistas, que impidió la aprobación del proyecto de ley Antiferrorista, al que en el Congreso habían votado afirmativamente. No es que los hombres del P. S. O. E. hayan echado marcha atrás en su valoración del contenido de la ley; su gesto fue simplemente una escaramuza con visos de recordatorio de que sin su concurso cualquier iniciativa de U. C. D. puede quedar bloqueada. Los senadores socialistas hicieron así saber a sus colegas del partido del Gobierno que para ellos, en lo que al consenso se refiere, no caben medias tintas: allá el vicepresidente Abril si lo pactado en la cena de José Luis, en materia de enseñanza, no resulta aceptable para las bases de U.C.D.; pero ahora ya —al menos en los sustancial y conflictivo— no se mueve ni una coma.

Esta actitud, ante que las huestes gubernamentales, de buen grado o a la fuerza, no van a poder por menos que terminar plegándose, deja un margen de manobra verdaderamente estrecho a la Comisión Constitucional del Senado. Es una auténtica lástima, puesto que la presencia en la misma de expertos en materia de derecho político del calibre de un Carlos Ollero, un Luis Sánchez Agesta, un Torcuato Fernández-Miranda o un Martín Retortillo, unida al elevado tono medio de sus restantes miembros, habría servido, en otras circunstancias, para mejorar sensiblemente el texto. Mucho me temo que en las próximas semanas la conveniencia va a primar aparatosamente sobre la razón.—Pedro J. RAMÍREZ.